



Un camión cargado con frutas y hortalizas circula junto a las tuberías del trasvase. TONY SEVILLA

La Comisión del Agua certifica que el recorte del trasvase lo hace inviable

Los regantes reclaman apoyo a la Diputación para pedir al Gobierno que aplaze los cambios hasta comprobar si las inversiones son efectivas

1

F. J. Benito

16·07·21 | 20:08 | **Actualizado a las 20:08**

La **Comisión Provincial del Agua** debatió y aprobó este viernes el informe en el que se constata que los cambios incorporados al **plan hidrológico del Tajo**, que entrarán en vigor a lo largo del 2022, van a provocar un **recorte anual de alrededor de 150 hm³ de agua del Tajo-Segura**, lo que pone contra las cuerdas el futuro de una gran parte del sector agrícola de la provincia, que no puede asumir los costes del agua desalada. Quedan seis meses para presentar alegaciones, la Diputación aportará las suyas y ayer la vicepresidenta, Ana Serna, anunció que llevará también el informe al Pleno de la institución para pedir apoyo y colaboración de todos los grupos y convencer a la ministra para la Transición Ecológica, Ana Serna, de que no toque el trasvase. De entrada, el próximo 27 de este mes de julio está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el primer «tajo» al trasvase con el cambio de las reglas de explotación, con lo cual el caudal máximo a enviar se reducirá de 38 a 27 hm³,

unos 55 hm³ menos al año si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, cuando en 5 de ellos la reserva de agua en los embalses de la cabecera del río ha permitido el trasvase máximo.

RELACIONADAS

El laberinto del agua con el Tajo-Segura al fondo

El Gobierno no se mueve de la hoja de ruta que pasa por sustituir el trasvase por agua desalada

La Comisión Provincial del Agua se reunió en sesión extraordinaria para analizar las modificaciones legales previstas en la **planificación hidrológica del Tajo** (aumento de los caudales ecológicos), y del **trasvase Tajo-Segura** (modificación de las reglas de explotación), y ratificar el análisis del órgano técnico de esta comisión alertando de que estas medidas «suponen, en la práctica, la inviabilidad del trasvase, con los evidentes graves impactos socioeconómicos y ambientales que tendría», ya que reducirían los caudales en hasta 146 hm³ al año, según los expertos.



Un momento de la reunión telemática de la comisión provincial del agua.

El PSOE defiende que lo importante es «tener agua. Venga de donde venga, y se genere donde se genere»

”

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, que presidió la sesión, anunció, asimismo, que elevará al Pleno el acuerdo, e insistió en que «ante la pasividad del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo único que podemos hacer ahora es presentar alegaciones contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica».

Durante la reunión, celebrada de forma telemática, se puso de manifiesto que las inversiones e infraestructuras anunciadas por el Gobierno no compensarán la pérdida de los caudales del trasvase, así como el coste elevado que supondrá el uso del agua desalinizada, cuyo precio se calcula entre 50 céntimos y un euro el metro cúbico.



En la comisión se ha analizado un informe sobre las consecuencias de los recortes

El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE), defendió, no obstante que «lo importante es que tengamos agua. Venga de donde venga, y se genere donde se genere». Los regantes y la vicepresidenta Serna le advirtieron de que «no da igual de donde venga, por la calidad de

la misma , y en la Vega Baja necesitamos agua de los ríos», apuntó Pedro Mompeán, juez de Aguas de Orihuela. Por su parte, Javier Berenguer , presidente de Riegos de Levante subrayó que «es inasumible para el agricultor pagar por el agua desalinizada 50 céntimos». Berenguer abogó por abordar la cuestión de los caudales ecológicos en el siguiente ciclo hidrológico, «solo después de que se hayan hecho las inversiones prometidas y comprobado su eficacia». José Andújar, de Fecoreva, apuntó que «la realidad es que primero nos quieren quitar el agua y luego nos prometen las obras».

Las alegaciones de la Diputación se centrarán en tratar de demostrar y convencer a la vicepresidenta Teresa Ribera de que la planificación del Tajo no se puede abordar sin tener en cuenta a los usuarios del trasvase Tajo-Segura, y los efectos sociales y económicos que esta tendrá y, por otro, poner de manifiesto los informes técnicos que se han obviado en la propuesta de elevar los caudales ecológicos del Tajo. «Todas las decisiones que se han adoptado para la fijación de los caudales ambientales son las más restrictivas para el trasvase Tajo-Segura», indicó el profesor de la Universidad de Alicante, Andrés Molina.